



INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS, DENOMINADO “ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS. 30 PLAZAS (3 LOTES)”

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la necesidad de celebración de este contrato se justifica atendiendo a las siguientes consideraciones:

Los menores con medidas de protección de Guarda o de Tutela acordadas por la Comisión de Tutela del Menor están acogidos por la Dirección General de la Familia y el Menor en Centros Residenciales que, bien son propios y son gestionados directamente por la Dirección General de la Familia y el Menor, o bien son contratados y están gestionados por Entidades.

El presente contrato se rige por la siguiente normativa y que justifica la competencia que ejerce este centro directivo para el cumplimiento del objeto del contrato:

- La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor, encomienda la tutela, guarda y acogimiento de menores a la Entidad Pública que en el respectivo territorio tenga a su cargo la protección de menores, habiéndose atribuido, en el caso de la Comunidad de Madrid, dichas funciones a la Consejería de Integración Social (en la actualidad Consejería de Políticas Sociales y Familia) mediante Decreto 49/88, del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad.

Así mismo, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor, establece los principios rectores de la acción de las Administraciones Públicas en materia de infancia, y exige a las Entidades Públicas competentes la adecuada regulación, autorización, inspección y supervisión de las instituciones que acojan menores de edad.

Esta Ley Orgánica, así como la Ley 6/1995, de Garantías de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en la Comunidad de Madrid, destacan como principio rector de la actuación de los poderes públicos la supremacía del interés del menor. La segunda de las leyes mencionadas establece en sus artículos 56 y 63 que la tutela y la guarda podrán ejercerse por la Administración mediante la atención a los menores en centros residenciales. Por su parte, el artículo 66 contempla el derecho de los menores residentes en Centros Residenciales a acceder a los servicios necesarios para atender todas las necesidades que demanda el adecuado desarrollo de su personalidad y que no sean satisfechas por el propio Centro.

- La Ley Orgánica 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y la adolescencia, que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio nacional, introduciendo una mejora en los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del artículo 39 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la





familia, y ,en especial, de los menores de edad. En su artículo 10 se refuerzan las medidas para facilitar el ejercicio de los derechos de los menores y se establece un marco regulador adecuado de los relativos a los menores extranjeros, reconociendo, respecto de los que se encuentren en España y con independencia de su situación administrativa, sus derechos a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales.

- La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, desarrolla y refuerza el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, dotando de contenido al citado concepto.
- La Resolución, de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados, tiene como objeto coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición del Servicio Público de protección de menores y documentación.
- La Ley 2/1996 de 24 de Junio, por la que se creó el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, encomienda a este Organismo ejercer las competencias que a la Comunidad de Madrid le corresponden en materia de protección de menores. Con la extinción del IMFM por Decreto 72/2015, de 7 de julio, en virtud del cual se modificó la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, se estableció que las competencias del Instituto fueran asumidas por la Dirección General de la Familia y el Menor.
- Por su parte, el Estatuto de las Residencias de Atención a la Infancia y la Adolescencia, aprobado por Decreto 88/1998, de 21 de mayo, exige a estas Residencias el desarrollo de las funciones de educación y cuidado y promoción de la salud de los residentes (artículo 5), debiendo programar y desarrollar la vida cotidiana del Centro, diseñar, realizar y evaluar periódicamente el Proyecto Individual de cada menor, dar a los cuidados y atenciones a las necesidades básicas de los niños un profundo sentido educativo y afectivo (artículo 6) y facilitar la reincorporación familiar del menor o, en los casos en ésta resulte imposible, promover la alternativa familiar más adecuada.
- La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que establece en su artículo 35 el régimen aplicable a los menores no acompañados.
- El Real Decreto 557/2001, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, en cuyo título XI, capítulo III, desarrolla los requisitos, procedimientos y criterios de aplicación respecto al tratamiento de los menores extranjeros no acompañados.
- La Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre.





- La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que determina los sectores de infancia y juventud marginada como tributarios de atención por los Servicios Sociales, a fin de prestarles la adecuada protección previniendo su marginación, fomentando su participación social y favoreciendo su incorporación a la sociedad mediante actuaciones normalizadoras e integradoras. Ello de conformidad con los principios que el art. 3 de dicho texto legal señala como inspiradores de los Servicios Sociales y de entre los que cabe destacar el de responsabilidad pública y el de colaboración de la iniciativa privada.
- La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en la que se recoge que las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables, entre los que se encuentran los Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS). En concreto, el artículo 1º.3 establece que "...Las Administraciones públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados.

Por su parte, el artículo 14 se refiere a los supuestos de "Atención Inmediata" estableciendo que "Las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso, al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.

Hemos de tener en cuenta que, atendiendo a la legislación internacional y nacional, no existe la posibilidad de establecer listas de espera para este perfil concreto de población, debiéndose garantizar su atención inmediata.

- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que modifica el apartado 2 del art. 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El objeto del contrato consiste en el acogimiento residencial de 30 menores extranjeros no acompañados, de 13 a 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al cumplimiento de los 18 años), con medida de protección de guarda o tutela en tres recursos convivenciales de 10 plazas cada uno.

En el objeto del contrato se incluye la acogida y atención integral para que estos menores consigan su integración social y cultural en este país y en la cláusula III del Pliego de Prescripciones Técnicas se contempla el detalle de todas las prestaciones que conlleva, por lo que el objeto es completo y se relaciona directamente tanto con las competencias a ejercer por la Comunidad de Madrid como por las necesidades sociales a cubrir.

Según los últimos datos publicados, el número de menores migrantes que llegan solos a España ha aumentado un 60,4% en 2017 con respecto al año anterior.





Comunidad de Madrid

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, y de los datos de atención del año 2017, se deduce una media mensual de 66 ingresos de MENAS, y en los primeros meses del año 2018, el número de ingresos está sobre esa misma media.

Esta sobreocupación imposibilita una atención adecuada a los menores, dañando la convivencia entre ellos, y, a la vez, ocasionando problemas de seguridad, tanto para éstos como para los profesionales de estos centros, que se encuentran desbordados y con escasas posibilidades de prestarles la atención y cuidados que precisan, en unos momentos tan delicados como son la llegada y la acogida. En especial, hace inviable el desarrollo del Proyecto de Intervención Educativa, tanto con ellos como con los menores susceptibles de protección y que no son MENAS, y que comparten los mismos Centros de Primera Acogida.

Esta tendencia alcista se está consolidando en el tiempo y el interés público exigiría la creación de más plazas de las que ahora se convocan, pero por limitaciones presupuestarias y razones de eficiencia del gasto público, se considera adecuada y proporcional la apertura de 3 centros, con un total de 30 plazas.

Teniendo en cuenta la normativa vigente y la actual situación de demanda de atención a menores extranjeros no acompañados con medida de protección, donde se hace necesario ofrecer una solución ágil y duradera que dé respuesta a esta necesidad social, se considera adecuado dividir el objeto del contrato en tres lotes, dado que un centro de 30 plazas no sería un proyecto viable, teniendo en cuenta el perfil complejo de estos menores enmarcado dentro de las siguientes características:

- A nivel psíquico: impulsividad, dificultades de autocontrol, escasa tolerancia a la frustración, endurecimiento emocional, falta de asertividad.
- A nivel social: ausencia de figuras adultas de referencia en nuestro país; proyecto migratorio sin definir; consumos asociados de sustancias tóxicas; marginalidad en su país de procedencia; etc.
- A nivel formativo: escolaridad insuficiente en su país de origen; conocimientos y/o aprendizajes no adaptados a los planes formativos de nuestro país; escaso o nulo conocimiento del castellano; etc.

Con el objeto del contrato se están cumpliendo los principios que rigen la contratación pública, fundamentalmente, los **principios de igualdad y no discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia**. Además, la división en lotes del objeto del contrato cumple el objetivo también de facilitar el acceso de las PYMES a la contratación pública.

En virtud de lo establecido en las normas citadas, la Dirección General de la Familia y el Menor **no puede prestar con sus propios medios este Servicio** y al no considerarse la ampliación de los medios disponibles por las razones contempladas a lo largo del presente documento, se ha de recurrir a una contratación exterior para su ejecución por particulares que desarrollen una actividad análoga a lo que constituye el objeto del mismo, y que proporcione las condiciones adecuadas para dar cobertura a las necesidades de los menores durante su periodo de permanencia en los Centros, al objeto de dar cumplimiento a las funciones que esta Dirección General tiene encomendadas.





Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la tramitación de un contrato de servicios para el Acogimiento Residencial de Menores Extranjeros No Acompañados, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al cumplimiento de los 18 años), atendidos con cargo a esta Dirección General.

Madrid, a 31 de mayo de 2018

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FAMILIA
Y EL MENOR

Fdo.: Alberto San Juan Llorente

